

ANEXO I: Crítica detallada del estudio producido por AfdB y WWF Kenia, titulado “Towards Large-Scale Investment in African Forestry”, de junio de 2019

1. El estudio repite las mismas promesas falsas y traicioneras que siempre hacen las empresas defensoras de las plantaciones industriales de árboles. Por ejemplo:
 - “[...] las plantaciones pueden tener un efecto significativo sobre los medios de vida de las personas, sobre todo de las mujeres, al generar empleos pagos y oportunidades para la diversificación de ingresos”;
 - “las plantaciones también pueden favorecer la biodiversidad local, reducir la degradación del suelo y mejorar la calidad del agua, todo lo cual beneficia ampliamente a las comunidades locales que de otra forma carecerían de las condiciones necesarias para cuidar sus recursos naturales”;
 - las plantaciones “generan beneficios para la calidad del suelo y el abastecimiento de agua”, y “plantar árboles ayuda a combatir la erosión”;
 - “hubo un resurgimiento enorme de la vida silvestre en las plantaciones de árboles y los paisajes de África oriental”;
 - “áreas de alto valor de conservación, humedales, sitios culturales y otras áreas valiosas serán identificados por expertos [...] y gestionados separadamente”;
 - “los programas de desarrollo [de las empresas] para las comunidades locales son otro gran atractivo de la reforestación industrial en África”;

Las experiencias de las comunidades con plantaciones dentro de sus territorios son completamente distintas de las afirmaciones del estudio y de estas falsas promesas:

- Las plantaciones de árboles a gran escala conllevan una gran cantidad de violaciones de los derechos sociales, económicos, culturales y ambientales.
- Las plantaciones generan muy pocos empleos, que son mal pagos y peligrosos. Por ejemplo, a fines de los años 1990 en Tanzania, la empresa Green Resources obtuvo acceso a un tercio de las tierras de las comunidades de Idete y Mapanda, por un período de 99 años. Sin embargo, hoy genera apenas 1 puesto de trabajo permanente en cada una de estas poblaciones de miles de habitantes.
- Las plantaciones no solo no son bosques, sino que llevan a la destrucción de los bosques y las praderas y, por ende, a la destrucción de la fauna y la flora; las plantaciones degradan los suelos, contaminan y agotan las fuentes de agua, destruyen los medios de vida comunitarios.
- Además de las plantaciones, las empresas se apropian de áreas de “alto valor de conservación”, identificadas por especialistas contratados por las propias empresas. Estas áreas se tornan inaccesibles para las comunidades al restringir su derecho de libre circulación, y desestructuran aún más su modo de vida basado en el territorio y sus riquezas: bosques, suelo, agua, etc. En Uganda, por ejemplo, se constató que las comunidades se enfrentan a una crisis alimentaria provocada por las restricciones de acceso a la tierra, el agua y la leña, impuestas por el proyecto [de la empresa Green Resources].
- Con la llegada de estas empresas, las formas de vida tradicionales son desestructuradas y aumenta la cantidad de familias sin tierra y sin empleo. Con esto aumentan los problemas sociales, como el alcoholismo y la violencia. Con la llegada de los guardias hay un aumento de los casos de acoso, de la violencia sexual y el abuso de mujeres y niñas. Este es uno de los impactos más graves y encubiertos por las propias empresas, que contribuye también a aumentar la incidencia del VIH/SIDA, como fue relatado por comunidades de Tanzania.
- Los supuestos proyectos de desarrollo comunitario generalmente no son implementados o demoran un tiempo enorme en serlo. Para las empresas, la simple promesa de estos proyectos sociales es una de las principales monedas de cambio para conseguir lo que es más importante para ellas: tierras fértiles que suelen pertenecer a las comunidades rurales. Los proyectos sociales nunca compensan las pérdidas que la comunidad sufre a causa de las plantaciones.

2. Sobre los **conflictos por la tierra**, el informe se refiere a estos como simples “problemas de tenencia de la tierra”, y la solución propuesta es “atenerse al FSC y otras buenas prácticas”. Los autores afirman que “El Fondo [que quieren crear] deberá enfocarse finalmente en proyectos certificados o certificables por el FSC”.

El estudio ignora una extensa documentación que comprueba que el FSC no resuelve los problemas estructurales de las plantaciones, principalmente la cuestión de la tenencia de tierras. Más aún, las empresas se han servido del FSC para legalizar su posesión ilegal de las tierras, como por ejemplo en Brasil. Respecto a esto, las empresas engañan a los inversores y consumidores de los países industrializados, como si el producto final de las plantaciones hubiera sido producido de forma socialmente justa. Otro problema estructural del FSC es que el sistema considera que el modelo de plantaciones a gran escala es “sostenible”. Este es el modelo esencial para las empresas, porque garantiza la mayor productividad y, por lo tanto, el mayor beneficio. Pero, al mismo tiempo, este modelo siempre conduce al uso intensivo de agrotóxicos y fertilizantes químicos, a la usurpación de grandes extensiones de tierra, preferentemente fértiles, llanas y con disponibilidad de agua, o sea, tierras generalmente utilizadas por las comunidades. Por último, las tierras donde las comunidades carecen de seguridad en cuanto a su tenencia son las preferidas, porque facilitan aún más el proceso de usurpación. Otro problema clave del FSC es que la empresa supuestamente “independiente” que hace la certificación, es contratada y pagada por la empresa de plantaciones que pretende obtener el certificado, o sea, nunca existirá una real independencia de la empresa que realiza la certificación. Esto debilita aún más la lucha por la justicia de las comunidades perjudicadas por las plantaciones. Hasta hoy, si se pagaron compensaciones a las poblaciones que perdieron sus medios de subsistencia, siempre fueron irrisorias o inexistentes. **En cuanto a los daños sociales, ambientales, económicos y culturales causados por el monocultivo de árboles en las áreas rurales de África**, aun si hubiese una forma de calcularlos, muchos serían irreparables.

3. El estudio afirma también que Mozambique es uno de los países que más inversiones recibió para plantaciones de árboles en África, en los últimos 10 a 15 años. Y hace referencia a un proyecto del **Banco Mundial/CFI**, destacando que “un elemento importante del enfoque de la IFC será **definir y registrar los derechos a la tierra**”.

De hecho, además de financiar las plantaciones, el Banco Mundial tiene una política para incentivar a los gobiernos de los países del Sur a acelerar la titulación individual y, por ende, la privatización de las tierras, buscando evitar su reconocimiento colectivo como tierras comunitarias. El objetivo de esta política es facilitar la entrega de estas tierras a empresas privadas. Este también es el objetivo de la actual propuesta de revisión de la política de tierras, anunciada por el gobierno de Mozambique, en pleno estado de emergencia por la pandemia de la Covid-19, lo cual dificulta aún más las pocas posibilidades de las poblaciones rurales para movilizarse e intervenir en el proceso. El Banco Mundial está promoviendo la entrega de tierras comunitarias al capital privado en el mundo entero. En Mozambique, desde 2005, incentiva los plantíos para agrocombustibles, así como las plantaciones industriales de árboles de la empresa Portucel, y apoya otros grandes proyectos destructivos como los de minería, dejando cada vez más comunidades sin tierra.

4. El estudio pretende engañar al lector afirmando que las plantaciones de árboles serían “un depósito de carbono estable y de largo plazo”, y que generan “beneficios sustanciales para el proceso de adaptación” al cambio climático a nivel local.

Al hacer esta afirmación, el informe ignora una creciente cantidad de estudios científicos que demuestran que el monocultivo de árboles es una falsa solución para el clima. Para citar solo algunos de los más recientes: un estudio realizado en Chile, segundo país de América Latina con más plantaciones después de Brasil, muestra cómo, tras 25 años de subsidios públicos para la plantación de árboles, la biodiversidad se redujo sin incrementar la cantidad de carbono en la biomasa de la tierra. Otro estudio de la revista Science genera grandes dudas sobre la seguridad a largo plazo de almacenar carbono en los árboles, en un mundo cada vez más caliente.

Más allá de esto, las experiencias de las comunidades del mundo entero con plantaciones de árboles muestran que estas solo contribuyen a generar un ambiente local menos capaz de enfrentar los impactos cada vez más perceptibles del cambio climático. Solo una producción diversificada, saludable, que no utilice agrotóxicos y que fomente la soberanía alimentaria puede generar condiciones para enfrentar mejor el cambio climático a nivel local, hoy y en el futuro. Nunca las plantaciones de árboles.

5. Otra afirmación falsa y grave: “El mundo precisa el tipo de plantación de árboles [...], que la industria forestal brasilera está por realizar”.

La verdad es que la **experiencia brasilera con las plantaciones de las últimas décadas ha provocado innumerables conflictos por la tierra y la degradación ambiental**. No es de extrañar que haya sido en Brasil donde las comunidades crearon el Día internacional de lucha contra el monocultivo de árboles. Hay una vasta documentación sobre innumerables conflictos por la tierra, incluso de la mayor empresa que opera en Brasil, Suzano, que hoy se encuentra entre los mayores latifundistas del país con 2,1 millones de hectáreas de tierra cubiertas por plantaciones, en un país donde todavía no hubo una reforma agraria amplia. Suzano también promueve la utilización de eucaliptos transgénicos, con impactos imprevisibles. Los estados brasileiros donde Suzano está instalada deben hoy a la empresa R\$ 1.8 mil millones (más de USD 350 millones) por concepto de incentivos fiscales; mientras tanto, no consiguen garantizar un servicio sanitario digno para sus habitantes, situación que se agrava aún más en tiempos de pandemia por el nuevo Coronavirus. Los municipios con mayor concentración de plantaciones de esta empresa exportadora están entre los más pobres, al contrario de aquellos con una agricultura diversificada en base a pequeños agricultores y sin la presencia de grandes empresas latifundistas.

6. El informe afirma también que “Empresas mundiales petroleras e industriales [...] quieren transformarse en parte de la solución en lugar de ser un problema mayor. Ellas están comenzando a ver el potencial de invertir en las plantaciones de árboles”.

Las empresas de gas y petróleo son una parte esencial del problema. Y no han mostrado interés alguno en resolverlo, sino que, por el contrario, pretenden tan solo invertir en falsas soluciones ya que, para ellas, la ganancia está por encima de todo. Las transnacionales del sector, como la italiana ENI y la anglo-holandesa SHELL, llegaron a anunciar mega-proyectos de plantación de árboles para supuestamente “compensar” su mega-contribución a la crisis climática. El Banco Africano de Desarrollo está en total connivencia con esta estrategia. Al mismo tiempo que financia el estudio sobre cómo plantar más árboles en África como falsa solución para el clima, también provee fondos en Mozambique para un nuevo mega-proyecto de extracción de gas realizado por un consorcio de empresas entre las que figura ENI, en la provincia de Cabo Delgado. Si estas empresas quieren realmente ser parte de la solución, deben mantener el petróleo y el gas debajo del suelo, lo cual podría evitar también las innumerables violaciones de derechos ligadas a esta actividad extractiva.

7. El estudio se refiere a Uruguay como “el país con plantaciones forestales más recientemente desarrollado”.

Los principales impactos negativos de las plantaciones que ocurren en los países del Sur también ocurren en Uruguay. Por ejemplo, al mismo tiempo que las plantaciones avanzaron sobre el territorio uruguayo durante los últimos 20 años, la población rural se redujo a la mitad. Recientemente, el pueblo uruguayo asumió una enorme deuda por un contrato firmado entre su gobierno y la multinacional finlandesa UPM, sin conocimiento de la población. Mediante este contrato, el gobierno de Uruguay aceptó construir una red de infraestructura ferroviaria millonaria que va desde el centro del país, donde UPM decidió construir su segunda fábrica de celulosa, hasta el puerto de exportación. Las pequeñas ciudades del interior del país y los barrios de la capital sufren las consecuencias directas, como la expropiación de sus tierras y los efectos negativos de las obras de desmantelamiento de las vías existentes, todo para garantizar el tránsito de los trenes de carga de UPM, de aproximadamente 800 metros de largo, 24 horas por día durante los 365 días del año.

8. En otra parte del informe se afirma que “Históricamente, el principal obstáculo para las inversiones exitosas en nuevas plantaciones de árboles en África ha sido su bajo rendimiento”; “en los últimos años, los nuevos plantíos de empresas privadas prácticamente se detuvieron”.

Este segmento revela una vez más lo que realmente importa a las empresas: sus ganancias. Al mismo tiempo, los consultores ignoran deliberadamente el principal motivo por el cual la expansión de las plantaciones ha sido frenada en África: la **resistencia de las comunidades a las plantaciones** industriales de árboles en el continente africano. A nadie le gusta perder su tierra, su libertad, sus cultivos; enfrentar el hambre; perder sus bosques y praderas, y hasta sus lugares sagrados. La resistencia ha sido y continúa siendo el principal obstáculo para el avance de las plantaciones, especialmente en África donde la mayor parte de la población aún vive y depende del campo, las praderas y los bosques.

9. El estudio busca incluso atraer inversores sugiriendo “la posibilidad de plantar [árboles] a costos significativamente menores”, aproximadamente la mitad que hace 10 años. Prometer a las empresas que tendrán menos gastos significa que el peso de los nuevos proyectos de plantación del Fondo propuesto recaerá aún más sobre los países africanos ya endeudados y, por lo tanto, sobre sus poblaciones. En especial sobre las comunidades rurales africanas que corren el riesgo de perder sus tierras más fértiles. Con la actual promesa para los inversores de que los costos pueden reducirse a la mitad, los efectos negativos tienden a aumentar aún más.
10. Es importante también destacar que una ONG “conservacionista” es la coproductora de este estudio sobre inversiones que pretende beneficiar solamente a las empresas privadas. El propio documento revela cómo **diversas ONG como el WWF**, hoy en día no pueden ser consideradas como ONG, pues funcionan y actúan como **‘brazo directo de la industria de las plantaciones’**. El estudio se refiere a dichas organizaciones como “ONG ambientalistas que han priorizado la recaudación de fondos privados para las plantaciones y otras actividades de conservación, en particular Conservación Internacional, TNC, WWF y otras organizaciones similares”. Por eso no sorprende que mientras varias ONG abandonaron el FSC por no confiar más en su sello, el WWF se mantiene y es hoy la principal “ONG ambientalista” que legitima el sistema FSC, cuando en realidad se trata de una de las principales aliadas de las empresas de plantación.

11. El informe señala también que la idea [de este Fondo] “fue presentada en Finlandia, en una mesa redonda con diversas DFI (siglas en inglés para las agencias públicas de financiamiento para el desarrollo), inversores y empresas de plantación”, y que las “reacciones [sobre este debate] fueron generalmente positivas”. Que “Este informe final (versión pública) representa los puntos principales del estudio” y que “[...] hay una alianza clara de las DFI interesadas en discutir mejor el asunto, entre ellas: CDC [Reino Unido], Finnfund [Finlandia], IFC [Banco Mundial], NDF [de los países nórdicos: Finlandia, Noruega, Suecia, Dinamarca, Islandia] y FMO [Países Bajos]”.

Los pasajes citados revelan, entre otras cosas, que existe otra versión del documento, inaccesible para el público. Demuestran también que los creadores del estudio, en conjunto con otros posibles inversores públicos y privados, se reúnen para preparar y tomar decisiones sobre inversiones **sin la participación de las comunidades y de la sociedad civil de las regiones que serán más afectadas**. Que estas empresas e inversores, después de estar todo decidido, se escuden en la aplicación del principio del “consentimiento libre, previo e informado” de las comunidades parece una broma de mal gusto. ¿Cómo pueden las comunidades hacer valer su derecho de rechazar el proyecto si todo ha sido definido y decidido mucho antes de presentarlo?